



Trabajo Fin de Grado

LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS ILÍCITOS: LA NUEVA ORGA

Presentado por:

Rafael Pedregosa Carranza

Tutor/a:

Félix F. Serrano Gallardo

Grado en Derecho

Curso académico 2016/17

Abreviaturas:

AEAT	Agencia Española de la Administración Tributaria
AGE	Administración General del Estado
AGRASAC	Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
ARO	Plataforma de la UE de Organismos de Recuperación de Activos
Art.	Artículo
BOMM	Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
CAB	Criminal Assets Bureau
CARIN	Red Interinstitucional de recuperación de activos
CE	Constitución
CNU	Convención de Naciones Unidas
COSC	Central Office for Seizure and Confiscation
CP	Código Penal
DGPNSD	Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas
Eurojust	Órgano de la UE encargado de la cooperación judicial
EUROPOL	Agencia de la Unión Europea en materia policial
FCSE	Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil
LECRIM	Ley de Enjuiciamiento Criminal
LO	Ley Orgánica
ORA	Oficina de Recuperación de Activos
ORGA	Oficina de Recuperación y Gestión de Activos
PNSD	Plan Nacional Sobre Drogas
POC	Proceeds of Crime
RAE	Real Academia Española
RD	Real Decreto
SRI	Sistema de Registro de Investigaciones
STS	Sentencia Tribunal Supremo
TS	Tribunal Supremo
UDEF	Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Policía Nacional)
UE	Unión Europea
UN	Naciones Unidas
UTPJ	Unidad Técnica de Policía Judicial (Guardia Civil).

SUMARIO:

I.	INTRODUCCION.	4
II.	MARCO JURÍDICO DE LA RECUPERACION DE ACTIVOS ILÍCITOS	9
1.	Antecedentes.	9
2.	El decomiso.	12
2.1.	Concepto.	12
2.2.	Naturaleza jurídica.	13
2.3.	Doctrina y jurisprudencia.	16
3.	La Oficina de recuperación y gestión de activos (ORGA).	18
3.1.	Concepto y estructura.	18
3.2.	Ámbito objetivo.	21
3.3.	Ámbito territorial y funciones.	25
3.4.	La cooperación nacional e internacional.	29
II.	ACTUACION COLABORATIVA DE LA ORGA CON OTROS ENTES.	34
1.	Especial referencia a la encomienda de gestión.	34
2.	La cooperación de la ORGA con el PNSD y otras instituciones.	35
3.	La adjudicación de los bienes decomisados.	37
4.	El uso provisional de los bienes decomisados.	40
III.	CONCLUSIONES.	41
Primero.-	Avance en la lucha contra la corrupción.	41
Segundo.-	Transposición del modelo comunitario a España.	41
Tercero.-	Inoperancia de la anterior ORA.	41
Cuarto.-	Órgano especializado en la adjudicación.	42
Quinto.-	Órgano especializado.	42
Sexto.-	Órgano de cooperación.	42
Séptimo.-	Cooperación internacional.	42
Octavo.-	Coordinación de las FCSE y Autonómicas.	43
Noveno.-	Herramienta de información.	43
Décimo.-	Recurso financiero.	43
Undécimo.-	Expectativas.	43
IV.	BIBLIOGRAFÍA	44
V.	ANEXOS:	45
1.	Anexo I: Estructura orgánica ORGA.	45
2.	Anexo II: Cronograma de implantación de la ORGA.	46
3.	Anexo III: Convenios suscritos con la ORGA.	47
VI.	SUMMARY: The new Office of Asset Recovery and Management.	48

I. INTRODUCCION.

La finalidad principal de la delincuencia organizada consiste en la obtención y acaparamiento de riqueza mediante la actividad criminal, que se convierte, en último extremo, en moneda de cambio para alcanzar el poder de facto¹. Por su parte, el Estado de Derecho, a través de sus Instituciones, se halla obligado por el contrato social a una reacción adecuada a esta forma de delincuencia gravosa que socava sus estructuras. Se puede avanzar que la respuesta estatal no ha sido, ni es, todo lo eficiente que podría considerarse como deseable y exigible por el ciudadano de un Estado Social y Democrático de Derecho avanzado.

El presente trabajo abordará cómo el legislador ha diseñado un órgano auxiliar de la Administración de Justicia, la nueva Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), por mandato de Europa, como herramienta criminológica que se pretende eficiente frente a la delincuencia organizada, incidiendo en el componente económico: efectos, instrumentos y ganancias, dimanantes del delito.

Una vez se delimite el marco jurídico en el que la Oficina podrá actuar, se hará una breve reseña de las novedades producidas en el ámbito procesal, poniendo el acento sobre la figura del decomiso, por su estrecha relación con aquel órgano.

Se delimitarán los antecedentes de la ORGA, para más adelante fijar los nuevos objetivos y el proceso a desarrollar en el ámbito nacional, pretendiendo poner de relieve la actuación colaborativa con otros entes de derecho público, sobre la base de la suscripción de convenios de colaboración. Finalizando éste trabajo, con las conclusiones obtenidas, consideradas relevantes y sobre las que se infiere un pronóstico de éxito de la Oficina.

Hay que recordar, que la Política Criminal española ha pivotado de forma tradicional sobre el castigo del delito, estableciendo el armazón legal para la imposición de una pena privativa de libertad al autor de los hechos. La doctrina

¹ SANZ MULAS, Nieves, *Política Criminal. Actualizada a las Reformas de 2015*, Ratio Legis Librería Jurídica, Salamanca, 2016, p. 175, la "...versatilidad y flexibilidad..." son características del crimen organizado, "...si bien su objetivo siempre es el mismo: el lucro..."

se plantea si la función reparadora y restauradora, inherente a la recuperación de los activos, quedaba en un segundo plano, teniendo en cuenta que el foco del proceso penal se dirigía sobre el delincuente y sobre su posible resocialización².

En pocas ocasiones se llegaba al rendimiento económico obtenido por la actividad criminal, casi siempre se hacía al finalizar el proceso penal, cuando se ejecutaba la sentencia. La dilatación procesal facilitaba que el activo pudiera eludir la acción de la Justicia, resultando ineficaz la figura del decomiso, por no haber procedido al embargo desde las primeras diligencias de investigación.

La inutilidad del decomiso, era consecuencia de la sobrecarga de los órganos judiciales, debido a la escasez de recursos personales y materiales que viene caracterizando a los Juzgados. El decomiso era, por tanto, una asignatura pendiente lo que, unido a las exigencias internacionales, ha movido al legislador a acometer reformas procesales y penales sobre esta institución.

El decomiso en la disciplina penal, tiene como objeto impedir el enriquecimiento injusto fruto de la actividad delictiva. Conforme a la normativa internacional, el decomiso responde a la máxima *“crime does not pay”*, impedir que el delito resulte provechoso. No obstante, venía siendo empleado de forma deficiente por los actores judiciales, frente al mantenimiento de depósitos judiciales repletos de instrumentos del delito (vehículos, embarcaciones, herramientas, objetos del delito...), en ocasiones faltos de un inventario exhaustivo y que generaban altos costes de mantenimiento³.

Antes de la reforma del decomiso en el proceso se intervenían los efectos e instrumentos del delito, de forma automática, por una cuestión meramente probatoria. Sin embargo, la expansión del crimen organizado, llamado incluso “delincuencia de la globalización”⁴, en principio en el ámbito del narcotráfico, y luego en gran variedad de actividades, ha obligado a efectuar revisar la Política

² VILLAREJO FERNÁNDEZ, Francisco Jiménez, «La nueva regulación del decomiso y la recuperación de activos delictivos en el ordenamiento jurídico español» [en línea], *Revista del Ministerio Fiscal*, 0, 2015, <https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/documentos/revistaFiscal/>, [consulta: 01 febrero de 2017], p. 94.

³ VILLAREJO FERNÁNDEZ, Francisco Jiménez, «La nueva regulación del decomiso...» cit., p. 94.

⁴ SANZ MULAS, Nieves, *Política Criminal...*, cit., p. 175.

Criminal nacional y mundial. Ante este nuevo escenario, se pretende fijar la reacción social sobre la recuperación de activos ilícitos, de manera preventiva y reparadora del daño causado, apareciendo la figura del decomiso autónomo, independiente a la pena que se imponga al autor de los hechos.

La acumulación de grandes fortunas por el crimen organizado, frente a un Estado de Derecho imperfecto, obliga a la redefinición de la institución del decomiso. Según NU se calcula que la riqueza procedente de la actividad criminal se establece en un 3,6% del PIB mundial, lo que supondría unos 2,1 billones de dólares⁵. Según informe de EUROPOL de 2017, en la actualidad se hallan bajo investigación en la UE más de 5.000 organizaciones criminales, cuyos miembros pertenecen a más de 180 nacionalidades distintas⁶.

En este panorama España ocupa un lugar relevante, siendo calificada por EUROPOL como uno de “los cinco ejes criminales de la UE”. Por esta razón, es uno de los Estados que más solicitudes recibe de comisiones rogatorias sobre localización, embargo y decomiso de activos de origen ilícito, como señala Eurojust⁷.

Como herramienta de Política Criminal contra esta grave criminalidad, la UE aprobó la Directiva 2014/42 UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la UE. La transposición al ordenamiento jurídico español se hizo mediante la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modificó el CP y la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECrim para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

⁵ VILLAREJO FERNÁNDEZ, Francisco Jiménez, «La nueva regulación del decomiso...» cit., p. 95, que cita informe de la Oficina de Naciones Unidas: «Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organised crime», [en línea], https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011., [consulta: 01 marzo de 2017].

⁶ EUROPOL, «Organised Crime Threat Assessment 2017 de Europol» [en línea], <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment-2017.>, [consulta: 01 marzo de 2017], p. 14.

⁷ VILLAREJO FERNÁNDEZ, Francisco Jiménez, «La nueva regulación del decomiso...» cit., p. 95-96.

La LO 1/2015⁸ introdujo el decomiso autónomo, y en su Disposición Final Segunda modificó la LECrim en relación a la destrucción, realización anticipada y uso provisional de efectos judiciales, conteniéndose ya las referencias a la participación de la ORGA.

La Directiva determinaba que cada Estado desarrollase un órgano que se encargase de la localización, recuperación, embargo y gestión del activo ilícito, motivo por el que se creó la ORGA en España, como órgano administrativo auxiliar de la Justicia, especializado en tales tareas sobre los bienes ilícitos, que provienen –en principio- de la delincuencia organizada.

El antecedente de la ORGA, se encuentra en la Oficina de Recuperación de Activos (ORA), institución que se constituyó con motivo de la Conferencia organizada por EUROPOL y la Oficina de Activos Penales de Irlanda en 2002, y a la que asistieron representantes de todos los Estados de la UE y Eurojust, en la que se decidió crear una Red informal de comunicación de inteligencia financiera, para que las autoridades judiciales dispusieran de una herramienta legal que les permitiese poner en común los diversos métodos y técnicas de identificación, embargo, incautación y decomiso transnacional de los efectos y productos del delito, así como de otros bienes relacionados con la delincuencia ordinaria o crimen organizado.

La Red recibió la denominación de “Red CARIN⁹”, y otorgaba una base jurídica para los intercambios de información financiera, siendo su objetivo principal la máxima ya citada de garantizar que el delito no resulte provechoso para el delincuente. Cada ORA actuaba como punto de contacto o nexo institucional, para que el decomiso en el ámbito internacional pudiera ser despachado. Si bien se permitió a los distintos Estados miembros que constituyeran las Oficinas como considerasen oportuno.

⁸ <https://www.boe.es/BOE-A-2015-3439>.

⁹ CARIN es una red informal de contactos y un grupo de cooperación que se ocupa de todos los aspectos del decomiso de productos del delito. La red, compuesta por profesionales de 54 jurisdicciones y 9 organizaciones internacionales, está vinculada además a redes de recuperación de activos similares de África y América Latina; [en línea], <http://carin-network.org/spanish>., [consulta: 01 de marzo de 2017].

La ORA actuaba como tramitadora de los distintos decomisos llevados a cabo por aquellos órganos judiciales de terceros Estados y de los que se interesaba su colaboración. Circunstancia que se establecía de manera rigurosa en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 20 de noviembre de 2008 sobre los Productos de la delincuencia organizada con el fin de garantizar que el delito no resulte provechoso¹⁰.

En síntesis, la Comunicación señalaba que el decomiso y la recuperación de los productos del delito, así como la cooperación internacional en este ámbito, son esenciales para luchar contra la delincuencia organizada en la Unión Europea (UE).

No obstante, hasta la actualidad, los resultados obtenidos eran exiguos en comparación con los ingresos estimados de la delincuencia organizada, y, en cuanto a los procedimientos legales, aún no han sido completamente armonizados en los Estados miembros de la UE.

La ORGA, como se verá a lo largo de este trabajo, es una oficina multidisciplinar sobre la que existe una gran expectativa, en parte porque cargará con la relevante “gestión del activo ilícito”. Esta función suponía hasta el momento una verdadera carga burocrática para los órganos jurisdiccionales, que complicaba las causas penales. Por esta razón el legislador, mediante la ORGA, ha tratado de optimizar recursos en busca de una mayor eficiencia, con el fin que los órganos judiciales ocupen todos sus esfuerzos y recursos en su labor principal de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado¹¹.

En cualquier caso, se pretende el análisis de una institución novedosa de auxilio judicial y de lucha activa contra la criminalidad dirigida al estrangulamiento financiero de ésta y la obstaculización de la continuidad delictiva. Los órganos jurisdiccionales y la Fiscalía tendrán a su alcance esta herramienta a la que

¹⁰ VILLAREJO FERNÁNDEZ, Francisco Jiménez, «La nueva regulación del decomiso...» cit., p. 95, que cita la Comunicación.

¹¹ Art. 117.3 CE: El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

podrán encomendar tareas de localización, recuperación, conservación, administración, realización anticipada, asignación provisional y adjudicación, de los activos ilícitos.

Por último, la ORGA permitirá asimismo revertir de forma óptima el beneficio económico fruto del delito a favor de las víctimas y del impulso financiero de los medios del Estado contra la delincuencia organizada¹².

II. MARCO JURÍDICO DE LA RECUPERACION DE ACTIVOS ILÍCITOS.

1. Antecedentes.

Para la recuperación de activos procedentes del delito y su gestión económica, resulta obligado disponer de las herramientas legales necesarias que hacen posible su persecución.

El marco normativo actual, es el establecido en la Decisión Marco 2006/960/JAI («la iniciativa sueca»), teniendo en cuenta la disposición aplicable de protección de datos a nivel europeo y la Decisión 2007/845/JAI sobre cooperación entre los organismos de recuperación de activos de los estados miembros.

El legislador español a través de la LO 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, lleva a cabo la transposición de la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y decomiso de los instrumentos del delito, procedente del delito cometido dentro de la Unión Europea.

Ese mismo año 2015, mediante la reforma procesal a través de Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECrim para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, establece en su artículo 367 bis y siguientes, la destrucción y realización anticipada de los efectos judiciales intervenidos en el procedimiento penal.

Antes de la reforma, existía la Oficina de Recuperación de Activos (ORA), que no se puso en funcionamiento de manera independiente, al carecer de desarrollo

¹² «Plan de Acción 2017 ORGA», [en línea], <http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/oficina-recuperacion-gestion..>, [consulta: 02 de marzo de 2017] pp. 3-7.

legislativo que la hiciese operativa, estando asumidas sus funciones por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (actualmente CITCO¹³) o por la Delegación del Gobierno del PNSD a través de la Fiscalía Antidroga¹⁴, según el tipo de delito, en virtud de lo establecido por la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por el tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados¹⁵.

La decisión adoptada, de adjudicar la competencia al CITCO o al PNSD en función del ámbito objetivo, deviene ineficaz, porque tras la localización del activo, se carecía de competencias para la gestión. En la práctica actuaban como Oficina de Localización de Activos, las unidades específicas de las FCSE, siendo la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía y UTPJ de la Guardia Civil. Lo que pone de manifiesto que, los órganos jurisdiccionales carecían de un órgano de auxilio judicial pleno, para la administración judicial de los bienes intervenidos y enajenación de los efectos embargados y decomisados, teniendo que hacer frente a un trabajo extra asumible, pero poco afortunado debido a la escasez de medios materiales y personales de los que se dispone¹⁶.

La última reforma del CP en 2015, tiene como pretensión afrontar la carencia y potenciar la normativa existente, impulsando la creación y desarrollo de la ORGA, a través del RD 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina, teniendo como principal objetivo dotar a las autoridades judiciales

¹³ Órgano de Inteligencia español responsable de la gestión y análisis de toda la información estratégica relativa al terrorismo, crimen organizado y organizaciones radicales de carácter violento. Siendo el resultado de la unión entre el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista y el Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado, ambos dependientes de la Secretaría de estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

¹⁴ Disposición Adicional Primera del RD 948/2015 que regula la ORGA establece la relación con el Plan Nacional sobre Drogas, estableciendo la exclusión del ámbito de aplicación de la norma. En cualquier caso, se permite la suscripción de un convenio de colaboración entre la ORGA y el Plan Nacional sobre Drogas.

¹⁵ ACÓN ORTEGO, Ignacio., «La oficina de recuperación y gestión de activos: Aspectos procesales» [en línea], https://www.fiscal.es/fiscal/Ponencia_formacion_continua, [consulta: 02 de marzo de 2017], p.3.

¹⁶ VILLAREJO FERNÁNDEZ, Francisco Jiménez., «La nueva regulación del decomiso y la recuperación de activos delictivos en el ordenamiento jurídico español», [en línea], <https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/documentos/revistaFiscal>, [consulta: 02 de marzo de 2017], p.94-133.

competentes, de un sistema eficaz para la localización y administración de los activos de origen ilícito.

Constituida definitivamente la ORGA, como órgano de auxilio de la Administración de Justicia, se le atribuyen las funciones de:

- recuperación de activos que comprende la localización de bienes y efectos para la puesta a disposición judicial, con el objetivo de que puedan ser objeto de embargo y decomiso, evitando con ello un enriquecimiento injusto por los autores del delito;
- gestionar los efectos e instrumentos del delito, ofreciendo un respaldo judicial para que la administración realice de modo eficiente los objetos intervenidos, evitando con ello costes adicionales de mantenimiento imputables a la Administración; del mismo modo que se descarga y se sustraen tareas burocráticas a los órganos judiciales, cuyo esfuerzo debe radicar en la lucha contra la criminalidad.

La ORGA, actúa bajo la dependencia funcional de los Juzgados, Tribunales o Fiscalía, que le encomiendan la autoridad judicial. De este modo se puede contribuir de un modo más eficaz y otorgar, mayor celeridad en sus actos, economizando tiempo y recursos, sobre lo que subyace una mayor eficiencia.

Aunque más adelante, se verá en concreto la ORGA, para su configuración legal se han tenido en cuenta otras instituciones homologas del ámbito comunitario que tienen mayor recorrido, como ocurre con la francesa (AGRASC)¹⁷, cuya consolidación es una realidad, lo que supone una contribución al fomento de la cooperación internacional en el intercambio de información en materia de embargo y decomiso de los bienes procedentes de la delincuencia.

Con la nueva legislación, se permite que aquellos bienes objeto de decomiso en el marco de una causa criminal, tras ser satisfechas las responsabilidades

¹⁷BLANCO CORDERO, Isidoro., «La aplicación del comiso y la necesidad de crear organismos de recuperación de activos», ReAIDP / e-RIAPL, 2007, A-01:1-19. ISSN 1993-2995.

derivadas del ilícito penal dictadas por resolución judicial, puedan ser asignadas a la ORGA con el fin de que obtenga una fuente de recurso financiero.

Es un instrumento novedoso que puede plantear dudas sobre su normal funcionamiento y actuación, en relación al auxilio a las autoridades jurisdiccionales, por lo que en este trabajo de investigación se pretende dilucidar sobre aquellas cuestiones que puedan surgir de la operativa diaria, siendo conscientes de la dificultad que supone, proponer soluciones cuando la ORGA apenas ha iniciado su andadura en España.

2. El decomiso.

2.1. Concepto.

El decomiso consiste en la pérdida de los efectos e instrumentos producto del delito por parte del Estado, mediante la autoridad judicial, siendo por ello una figura jurídica clara desde el punto de vista conceptual y no tanto, en relación a su naturaleza jurídica, sobre la que existen posiciones enfrentadas y que podrán verse más adelante.

Si se observa la normativa internacional, se establece de manera clara que el decomiso debe entenderse como la privación definitiva de un bien por un órgano jurisdiccional en relación con una infracción penal; como toda pena o medida dictada por un tribunal con ocasión de un proceso penal relativo a una o varias infracciones penales, que tenga como consecuencia la privación definitiva de algún bien; o como sanción o medida ordenada por un tribunal en virtud de un procedimiento relativo a un delito o varios delitos y cuyo resultado sea la privación definitiva de un bien¹⁸.

Para abordar la figura jurídica del decomiso, es necesario tener muy presente la doble vertiente, dada por el prisma procesal y/o penal, ya que se encuentra regulada tanto en el CP, como en la LECrim. Legislación, que ha sufrido una

¹⁸Definiciones dadas por la Directiva 2014/42/UE (art.2.4) y Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito (art.1) y Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005 (art. 1).

importante modificación¹⁹, fruto de la necesidad de adaptar el sistema normativo español a la normativa comunitaria, aunque con ella, también (existen diversas modificaciones sustanciales y controvertidas) se ha efectuado una limitación temporal en los plazos dados para la investigación. Actualmente el tribunal instructor, deberá practicar todas las diligencias que estime oportunas, dentro de los seis meses desde la fecha dada por el auto de incoación del sumario o diligencias previas, pudiendo ser ampliado hasta dieciocho meses, siempre que se califique la causa como de “instrucción compleja”.

Con ocasión de la adaptación de la Directiva 2014/42/UE, de 3 de abril sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y productos del delito de la UE, ha supuesto que la terminología utilizada, pase ahora a denominarse “decomiso”²⁰ y no “comiso”, debiendo cambiarla en todos aquellos preceptos del CP, al objeto de buscar mejor acomodo con el lenguaje jurídico con respecto a lo establecido por el Diccionario de la RAE.

Desde la óptica procesal, se ha optado por establecer la posibilidad de realización anticipada de los efectos judiciales, que permite la adopción de medidas cautelares al objeto de asegurar el decomiso. Además de que se ha optado por establecer la posibilidad de solicitar el decomiso a otros Tribunales²¹ que se encuentren dentro de los países que integran la UE y que conozcan de la ejecución de la sentencia, en la que se estime como consecuencia accesoria el decomiso del bien.

2.2. Naturaleza jurídica.

En relación a la naturaleza jurídica del decomiso, pretender abordar de manera errónea la cuestión, afirmando que se está exclusivamente ante una consecuencia accesoria del delito, por la mera regulación sustantiva en el Título

¹⁹ LO 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del CP que sigue regulando el decomiso en el Título VI del Libro I del CP y añade nueve presupuestos más entre los art. 127 al 128 CP; y Ley 41/2015, de 5 de octubre, de reforma de LECrim para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

²⁰ Art. 260 de LO 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del CP establece que todas las referencias contenidas con el termino “comiso” se sustituyen por el termino “decomiso”.

²¹ Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE, en el Título VIII, Capítulo II establece la “Transmisión de una resolución de decomiso”.

VI del CP, bajo la rúbrica “De las consecuencias accesorias”, puede plantear dificultades, ante la existencia de distintos tipos de decomiso y sobre todo por las novedades que afectan especialmente a cuestiones del decomiso sin sentencia; el decomiso ampliado; y el decomiso de bienes de terceros.

Aquí se debe recordarlas diversas modalidades de decomiso: el decomiso basado en sentencia condenatoria²²; el decomiso ampliado²³; el decomiso sin sentencia condenatoria²⁴; el decomiso de bienes de terceros²⁵; el decomiso de bienes de la actividad delictiva continuada²⁶ y la ejecución efectiva del decomiso por valor equivalente²⁷.

El decomiso puede afectar a distintos bienes (muebles o inmuebles), efectos o instrumentos (vehículos, herramientas...), teniendo en cuenta las distintas circunstancias, es una evidencia, que no puede recibir el mismo tratamiento el decomiso de un arma de fuego (escopeta) adquirida para la comisión de un delito contra el patrimonio, en cuyo caso se darían los fines perseguidos por la pena (prevención general y especial) para evitar que el arma pueda ser utilizada de nuevo en la comisión de un delito.

Que el tratamiento dado al decomiso de los rendimientos producto del delito, donde se pretende evitar el enriquecimiento sin causa, mediante el decomiso sin

²²Artículo 127.1 CP “Toda pena que se imponga por un delito doloso llevará consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito...”.

²³Art. 127.1 bis CP “El juez o tribunal ordenará también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias pertenecientes a una persona condenada / ... /cuando resuelva, a partir de indicios objetivos fundados, que los bienes o efectos provienen de una actividad delictiva...”.

²⁴Art. 127 ter CP “El juez o tribunal podrá acordar el decomiso previsto en los artículos anteriores, aunque no medie sentencia de condena, cuando la situación patrimonial ilícita quede acreditada en un proceso contradictorio...”.

²⁵Art. 127 quáter CP “Los jueces y tribunales podrán acordar también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias a que se refieren los artículos anteriores que hayan sido transferidos a terceras personas...”.

²⁶Art. 127 quinquies “Los jueces y tribunales podrán acordar también el decomiso de bienes, efectos y ganancias provenientes de la actividad delictiva previa del condenado...”.

²⁷Art. 127 septies CP “Si la ejecución del decomiso no hubiera podido llevarse a cabo, en todo o en parte, a causa de la naturaleza o situación de los bienes, efectos o ganancias de que se trate, o por cualquier otra circunstancia, el juez o tribunal podrá, mediante auto, acordar el decomiso de otros bienes, incluso de origen lícito, que pertenezcan a los criminalmente responsables del hecho por un valor equivalente al de la parte no ejecutada del decomiso inicialmente acordado. De igual modo se procederá, cuando se acuerde el decomiso de bienes, efectos o ganancias determinados, pero su valor sea inferior al que tenían en el momento de su adquisición”.

sentencia condenatoria, siendo esta una consecuencia de naturaleza civil a la vista del Preámbulo de la L.O 1/2015 en su apartado VIII²⁸. Además, el legislador también subraya el hecho de que el decomiso ampliado no es una sanción penal, sino que se trata de una institución por medio de la cual se pone fin a la situación patrimonial ilícita a que ha dado lugar la actividad delictiva. Su fundamento, tiene una naturaleza civil y patrimonial, próxima a la figura del enriquecimiento injusto, no persigue reprochar al condenado la realización de un hecho delictivo, sino corregir una situación patrimonial ilícita²⁹.

Por tanto, si se plantea como una consecuencia exclusiva del derecho sancionador, o si se trata de una mera consecuencia civil derivada del delito, sus efectos son diferentes y de distinta consideración. Se está ante una cuestión controvertida, ya que, si se considera el decomiso como sanción, su aplicación se sujeta a los necesarios principios de presunción de inocencia y posterior declaración de culpabilidad de quienes venían siendo acusados y resultan posteriormente condenados.

Mientras que, si se considera que tiene naturaleza civil derivada del delito, pese a ser también sustanciada en el ámbito penal, esta pretende resarcir el daño ocasionado, así como la responsabilidad civil decretada, de ahí que se manifieste que tiene un carácter exclusivamente reparador.

No obstante, no hay que perder de vista que el decomiso es una consecuencia del delito, que puede servir de manera eventual para restituir aquellas

²⁸Tradicionalmente el decomiso del producto del delito ha estado vinculado a la existencia de una condena previa (penal) por el delito cometido. Con este punto de partida, se había afirmado que un decomiso sin condena es necesariamente contrario al derecho a la presunción de inocencia, pues autoriza el decomiso de efectos procedentes de un delito que no ha sido probado y por el que no se ha impuesto ninguna condena. Sin embargo, tal interpretación solamente viene determinada por un análisis del decomiso apegado a la regulación tradicional del mismo, y desconoce que, como ha afirmado el TEDH, el decomiso sin condena no tiene una naturaleza propiamente penal, pues no tiene como fundamento la imposición de una sanción ajustada a la culpabilidad por el hecho, sino que «es más comparable a la restitución del enriquecimiento injusto que a una multa impuesta bajo la ley penal» pues «dado que el decomiso se limita al enriquecimiento (ilícito) real del beneficiado por la comisión de un delito, ello no pone de manifiesto que se trate de un régimen de sanción» (Decisión 696/2005, Dassa Foundation vs. Liechtenstein).

²⁹CAMPOS NAVAS, Daniel., «Decomiso, medidas cautelares y recuperación de activos», [en línea], https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia_Campos_Navas., [consulta: 02 de marzo de 2017], p5.

responsabilidades civiles, evitando además la comisión de nuevos delitos y sobre todo la de evitar que el delincuente obtenga una ventaja económica, fruto de la actividad criminal.

Tal y como se ha venido señalando, la actual regulación plantea serios problemas, en mayor medida motivado, a la indefinición clara de la naturaleza jurídica de esta institución por parte del legislador. El decomiso en sentido estricto, no es una pena o medida cautelar, a pesar de que los bienes, medios, instrumentos y ganancias pueden ser aprehendidos o embargados y puestos en depósito desde las primeras diligencias.

Pese a que formalmente siga siendo una consecuencia accesorio, es una figura susceptible de ser cuestionada, habida cuenta de la posibilidad de que se decomisen bienes sin sentencia de condena o de que se acuerde respecto de bienes de terceros³⁰.

2.3. Doctrina y jurisprudencia.

La institución del decomiso³¹ es entendida por la doctrina y nuestra Jurisprudencia como la aprehensión o apoderamiento de un bien (mueble o inmueble) producto del ilícito penal; o sea porque este se hubiere empleado o intervenido como instrumento para la comisión del delito, privando por tanto a su poseedor o titular de la plena disponibilidad, en favor del Estado. Realizado y efectuado siempre a través de los órganos jurisdiccionales³² con potestad suficiente.

³⁰ VIDALES RODRIGUEZ, Caty., «Consecuencias accesorias: decomiso (art. 127 a 127 octies)», en José L. González Cussac (director), Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015, 2ª Ed, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 372- 395.

³¹ Solo se hace referencia al decomiso en el ámbito del derecho penal, porque es posible su existencia en el ámbito del derecho administrativo, en concreto en materia tributaria por impago de aranceles aduaneros como, por ejemplo, en una relación de compraventa internacional.

³² Art. 2.4) de la Directiva 2014/42/UE sobre el embargo y decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea.

Si observamos la normativa comunitaria³³ y convencional o de derecho internacional³⁴, podemos encontrar distintas normas³⁵ que también efectúan una definición sobre la institución del decomiso, concluyendo que se distingue entre una concepción amplia del decomiso, entendida como cualquier expropiación de un bien por la autoridad jurisdiccional como consecuencia de la vulneración de la norma; y por otro lado, desde una concepción estricta del decomiso, como aquella privación definitiva acordada por el Tribunal sobre el objeto concreto, instrumento o producto del delito.

En cualquier caso, deben darse los siguientes presupuestos de hecho para que se esté ante un verdadero decomiso:

- Debe existir una privación definitiva del bien
- Realizarse en virtud de una resolución judicial
- Existencia de un vínculo o nexo, entre el bien y la infracción penal.

El decomiso se diferencia de la medida cautelar, como la incautación, secuestro, embargo o confiscación, por afectar, a un todo o parte proporcional del patrimonio vinculado a la actividad criminal, no pudiendo ser delimitado de manera exclusiva y excluyente a los bienes que tengan relación con el producto del delito.

La Jurisprudencia del TS ha establecido que el decomiso debe anular toda ventaja económica obtenida como consecuencia del delito, ya que el ordenamiento jurídico español, no la entiende solo como consecuencia accesoria de la pena, sino que también la entiende como sanción administrativa impuesta en caso de infracciones a la normativa de contrabando. Por lo que nada se

³³ Decisión Marco 2005/212/JAI lo define en su artículo 2 como "toda pena o medida dictada por un tribunal a raíz de un proceso penal relativo a una o varias infracciones penales, que tenga como consecuencia la privación definitiva de algún bien".

³⁴ Art. 1-f) de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos lo define como "la privación con carácter definitivo de algún bien por decisión de un Tribunal o de otra autoridad competente".

³⁵ Art. 1-d) del Convenio nº 141 del Consejo de Europa abierto a la firma en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990 sobre blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso del producto de los delitos lo limita, en armonía con el contexto socio-jurídico al que se dirige, a "la privación definitiva de un bien ordenada por un Tribunal en un procedimiento relativo a un delito o delitos".

opondría a la consideración de una medida sui generis, ex delicto que alcance a todo el patrimonio directa o indirectamente perteneciente al condenado, dando la oportunidad de enervar la procedencia ilícita a los titulares o terceros de buena fe³⁶.

De igual modo que ha sentado el TS que se está ante una tercera clase de sanciones penales, siguiendo así nuestro CP la línea iniciada por los derechos penales germánicos de establecer un tercer género de sanciones bajo la denominación de “consecuencias jurídicas accesorias o consecuencias accesorias”.

Cosa distinta ocurre con la responsabilidad civil derivada del delito, esta es de naturaleza meramente civil, con independencia de que pueda ventilarse en el proceso penal, no impidiendo su conocimiento por la jurisdicción civil en caso de reservarse la acción civil³⁷.

3. La Oficina de recuperación y gestión de activos (ORGA).

3.1. Concepto y estructura.

En el actual panorama internacional, existen modelos de oficina relevantes como el de Francia (AGRASC); el de Reino Unido (POC), integrado en la fiscalía; el de Bélgica (COSC); Países Bajos (BOMM) o Irlanda (CAB), siendo adaptado el

³⁶ STS núm. 338/2015, de 2 de junio (Ponente: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre) (ECLI:ES:TS:2015:2555).

³⁷ Misma sentencia que la citada arriba [el CP 1995 considera el comiso como una “consecuencia accesorio” al margen tanto de las penas como de las medidas de seguridad. Su naturaleza es, según la doctrina más autorizada, la de una tercera clase de sanciones penales, siguiendo así nuestro Código Penal la línea iniciada por los derechos penales germánicos (CP. suizo o CP. alemán) de establecer un tercer género de sanciones bajo la denominación de “*consecuencias jurídicas o consecuencias accesorias*”].

Así la STS. 20.1.97 señala que “el comiso de los instrumentos y de los efectos del delito (art. 48 C.P. de 1973) constituye una “pena accesorio”, y, en el nuevo Código Penal, es configurada como una “consecuencia accesorio” de la pena (v. art. 127 C.P. 1995). En ambos Códigos, por tanto, es cosa distinta de la responsabilidad civil “ex delicto”, ésta constituye una cuestión de naturaleza esencialmente civil, con independencia de que sea examinada en el proceso penal, y nada impide que, por ello, su conocimiento sea deferido, en su caso, a la jurisdicción civil. El comiso, por el contrario, guarda una directa relación con las penas y con el Derecho sancionador, en todo caso, con la lógica exigencia de su carácter personalista y el obligado cauce procesal penal para su imposición].

modelo español al existente en Francia, debido a su larga y consolidada trayectoria.³⁸

Del análisis de los diferentes modelos de Oficinas de nuestro entorno comunitario que actúan como ORGA, se desprende que los sistemas de configuración en torno a los que giran las oficinas son básicamente³⁹:

- I- Oficina como organismo autónomo
- II- Como unidad especializada de la Fiscalía
- III- Órgano exclusivamente policial.

Por la similitud del sistema legal español, la ORGA se acomoda al primer sistema, siendo una institución de carácter administrativo, al ser un órgano perteneciente a la AGE y auxiliar de la Administración de justicia, dependiente a su vez del Ministerio de Justicia. Se configura como una Dirección General⁴⁰ adscrita a la Secretaria de Estado de Justicia, que se integra en la Subdirección General de Localización y recuperación de activos; y Subdirección General de Conservación, administración y realización de activos.

La Dirección General de la Oficina, dependiente de la Secretaria de Estado del Ministerio de Justicia, ha establecido como principales objetivos generales en su actuación:

- a) Recuperación y Gestión de activos procedentes de delitos cometidos en organización criminal.
- b) Lucha contra el delito y la delincuencia organizada.
- c) Disminución de costes en la gestión de los bienes.

³⁸ JAEN VALLEJO, M y PERRINO PEREZ, A., «Recuperación de activos frente a la corrupción», Daykinson, Madrid, 2015, p.143.

³⁹ JAÉN VALLEJO, Manuel y PERRINO PÉREZ, Ángel Luis, «Recuperación de activos derivados del delito: un objetivo prioritario de la reforma penal», en la Ley, núm.8545, 2015.

⁴⁰ ver Anexo I: Estructura orgánica de la ORGA [en línea], http://www.mjusticia.gob.es/Paneles_explicativos.pdf, [consulta: 01 de marzo de 2017].

- d) Descarga de trabajo de los órganos judiciales.
- e) Revertir el producto de los delitos en fines sociales.

De manera más concreta, la función asignada en la actuación de la Subdirección General de localización y recuperación de activos, se le encomienda la:

- a) Identificación, búsqueda, localización de bienes, instrumentos y ganancias del delito radicados dentro o fuera del territorio nacional.
- b) Aseguramiento y recuperación de efectos.
- c) Puesta a disposición de la información obtenida a la autoridad judicial o a los organismos e instituciones internacionales competentes.

Por todo ello se hace necesaria la coordinación con el Ministerio del Interior del que dependen las FCSE, además del Ministerio de Hacienda del que depende la AEAT, pudiendo efectuar cuantas colaboraciones se estimen oportunas, ya sea con cualquier entidad pública o privada que fuera oficiada, como la Administración Local titular de las Haciendas Locales.

La Subdirección General de Conservación, administración y realización de los activos, esta tiene encomendadas las funciones de:

- a) Mantenimiento y conservación de efectos, bienes, instrumentos y ganancias provenientes del delito,
- b) Resolver sobre la adjudicación del uso de los efectos embargados cautelarmente cuando el juez haya autorizado la utilización provisional.
- c) Gestión y administración de efectos, bienes, instrumentos y ganancias provenientes del delito, así como la realización de los bienes, incluida la venta anticipada, y la destrucción cuando fuera acordada judicialmente.
- d) Emisión de informes, colaboración y asesoramiento a las autoridades judiciales.

e) Soporte para el desarrollo de la actividad de la Comisión de Adjudicación.

f) Tramitación administrativa de la cuenta de depósitos y consignaciones.

Además de estos dos órganos, existe una Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito, que se encarga de la distribución de los recursos obtenidos por la oficina. Los criterios de distribución se efectúan conforme a los fines establecidos en la LECRIM ⁴¹, siendo fijados por Consejo de Ministros y cuyo objetivo prioritario es la prevención y represión de la actividad criminal, así como el apoyo y atención a las víctimas del delito.

3.2. Ámbito objetivo.

Antes de entrar sobre la cuestión planteada, si atendemos tanto a la propia norma, como al Dictamen emitido por el Consejo de Estado (TOL5.535.438) en relación con aquellos ámbitos en los que se excluye la actuación de la ORGA, se puede observar como de manera expresa no podrá actuar en el marco del PNSD⁴² o utilizar aquellos bienes decomisados por delitos de contrabando⁴³.

La delimitación del ámbito de actuación, tal y como establece el artículo 1 del RD 948/2015 de 23 de octubre, determina respecto de que delitos puede asumir la ORGA aquellas funciones de localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas de cualquier naturaleza, no limitándose con exclusiva a las ocurridas en el marco de las organizaciones criminales.

⁴¹ Disposición adicional sexta del RD 948/2015 que regula la ORGA a la que establece como órgano administrativo competente para la localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos procedentes de actividades delictivas en los términos previstos en la legislación penal y procesal.

⁴² Disposición adicional primera del RD 948/2015 que regula la ORGA establece la Relación con el Plan Nacional sobre Drogas en la que se faculta a la suscripción de convenios de colaboración.

⁴³ Disposición adicional segunda del RD 948/2015 que regula la ORGA establece la exclusión de los Bienes decomisados por delitos de contrabando.

Lo más relevante radica en el hecho de que la remisión tanto a la normativa procesal y penal, en particular⁴⁴, hace referencia a la facultad del Juez o tribunal de instar a la realización anticipada o la utilización provisional de los bienes procedentes de cualquier actividad delictiva, objeto de decomiso en el marco de la una organización criminal, por lo que es en este punto en el que se plantea la primera controversia.

La supuesta contradicción pone de manifiesto si la ORGA dispone de una competencia limitada a las organizaciones criminales o si, también puede extender sus funciones fuera de este estricto marco competencial. Por tanto, hay que observar si se debe efectuar una lectura del precepto dado por la LECrim, como si de una lista cerrada se tratase o si, por el contrario, se está ante una lista abierta.

Teniendo en cuenta la remisión reglamentaria y la interpretación literal de la norma procesal, se puede concluir que el artículo 367 septies de la LECRIM otorga potestad al Juez o Tribunal, sin por ello restarle competencias a la propia Oficina, más cuando los preceptos precedentes de la norma así lo establecen.

Véase también el Artículo 367 quáter de la LECrim, en la que se faculta a la ORGA para instar la realización anticipada de bienes previa audiencia de los interesados, sin efectuar limitación alguna a la delincuencia organizada.

De igual modo que el Artículo 367 sexies establece a la ORGA la resolución sobre la adjudicación provisional de los bienes decomisados de manera cautelar, sin tampoco efectuar limitación alguna a la delincuencia organizada.

Por tanto, se puede concluir que el ámbito objetivo de actuación no se solo pondrá el foco sobre la delincuencia organizada, sino que extenderá sus actuaciones de auxilio judicial a toda investigación criminal para la que fuese

⁴⁴ Art. 367 septies de LECrim. El juez o tribunal, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la propia Oficina de Recuperación y Gestión de activos, podrá encomendar la localización, la conservación y la administración de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. La organización y funcionamiento de la Oficina se regulará reglamentariamente.

requerida. Prueba de ello es la Orden JUS/188/2016, de 18 de febrero, por la que se determina el ámbito de actuación y la entrada en funcionamiento operativo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y la apertura de su cuenta de depósitos y consignaciones.

En la mencionada Orden se establece de manera acertada en su Art. 2⁴⁵ el ámbito de actuación, lo que hace despejar cualquier duda que se pudiera plantear en relación a la interpretación dada por la norma de rango superior, como lo es la LECrim.

Si observamos la Exposición de Motivos de la normativa de ORGA, la Oficina nace como herramienta de auxilio judicial, frente a la delincuencia organizada, dado el panorama nacional e internacional actual, cuya finalidad principal es la localización y gestión de activos en aquellas causas penales de gran complejidad y gravedad. Causas penales en las que concurren organizaciones criminales con infinidad de recursos para evadir la acción de la justicia, lo que obstaculizaba que Jueces y Tribunales dedicasen todos sus esfuerzos y recursos (personales y materiales) a llevar a buen puerto la acción de la justicia, de ahí la necesaria creación de la Oficina sobre la que asume un papel importante.

Es relevante, poner el acento sobre el carácter administrativo de la ORGA, ya que dicho mandato obliga de manera inexcusable a la obediencia debida y

⁴⁵ Orden JUS/188/2016, de 18 de febrero, por la que se determina el ámbito de actuación y la entrada en funcionamiento operativo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y la apertura de su cuenta de depósitos y consignaciones.

Artículo 2. Ámbito de actuación

1. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos actuará cuando se lo encomiende el Juez o Tribunal competente, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la propia Oficina. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos procederá, igualmente, a la localización de activos a instancia del Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus competencias en el ámbito de las diligencias de investigación, de la cooperación jurídica internacional, del procedimiento de decomiso autónomo o en cualesquiera otras actuaciones cuando así esté previsto en la legislación vigente.
2. Cuando la Oficina actúe a instancia del Juez o Tribunal o del Ministerio Fiscal, lo hará en el ámbito de las actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal, así como del resto de las actividades delictivas propias del ámbito del decomiso ampliado, en los términos previstos en las leyes penales y procesales y respecto a bienes cuya localización, embargo o decomiso se haya acordado a partir del 24 de octubre de 2015.
3. Cuando la Oficina actúe a iniciativa propia, en el marco de cualquier actividad delictiva, lo hará cuando resulte conveniente en atención a la naturaleza o especiales circunstancias de los bienes, previa autorización judicial, de conformidad con lo previsto en las leyes penales y procesales e independientemente de la fecha del embargo o decomiso”.

acatamiento de las órdenes dadas por el Juez o Tribunal o Fiscalía en el marco del auxilio judicial, siendo este su cometido principal. Es en este punto donde existe unanimidad doctrinal en cuenta a la interpretación que se le debe otorgar a dicho carácter administrativo, citando valoraciones doctrinales⁴⁶, que sostienen que la citada Disposición Adicional Sexta de la LECrim, define con un carácter más amplio las funciones de la ORGA, al no circunscribirlas solo a los instrumentos, efectos o productos procedentes de delitos cometidos en el ámbito de organizaciones criminales y extenderlas a los bienes incautados provisionalmente o decomisados en relación con cualquier actividad criminal⁴⁷.

En la misma línea argumental parece ubicarse la práctica judicial, ya que las instancias de colaboración de las que se ha requerido la actuación de la ORGA, versan sobre la gestión de bienes embargados y decomisados en el marco de ilícitos penales en los que no concurre el elemento de la delincuencia organizada, como elemento diferenciados sobre el que se viene discutiendo.

Por todo ello, para zanjar el asunto, se efectúa una comparación que puede dar luz en relación a las potestades de encomienda que pueden efectuar los Tribunales, cuando se oficia a un colegio profesional, institución administrativa⁴⁸ o cualquier otro ente, para que efectúe una determinada función, como pudiera ser la del depósito de un determinado objeto o instrumento intervenido en el marco de cualquier procedimiento criminal llevado a cabo por la autoridad judicial.

Fijado el criterio objetivo sobre la actuación de la ORGA, en la propia Orden Ministerial también establece la posibilidad de actuación en el marco del decomiso ampliado, cuya reforma operada en 2015 se ha potenciada considerablemente, extendiendo sus efectos más allá de delitos de terrorismo, a

⁴⁶ DÍAZ CABIALE, José Antonio, «El decomiso tras las reformas del código penal y la ley de enjuiciamiento criminal de 2015», Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2016, p.67.

⁴⁷ CUELLAR SERRANO, Nicolás González y MARCHENA GÓMEZ, Manuel., «La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015». Ed. Castillo de Luna ediciones jurídicas, 2015, p.516.

⁴⁸ Depósito de vehículo robado o utilizado en un ilícito penal en lugares pertenecientes a la administración local de donde se hubiere cometido el hecho delictivo. Claro ejemplo de ello son los vehículos utilizados para el porte de drogas o sustancias precursoras para el tráfico de estupefacientes.

aquellos delitos mantenidos en el tiempo y de los que se pueden derivar fuertes e importantes beneficios económicos ilícitos, abriendo con ello la puerta a delitos cometidos contra la salud pública; trata de seres humanos; relativos a insolvencias punibles; propiedad intelectual...., en definitiva todos aquellos ilícitos penales establecidos en virtud del artículo 127 bis del CP⁴⁹.

Para finalizar el asunto, la Orden Ministerial establece de manera clara la delimitación del ámbito de actuación de la ORGA, circunscrita continuamente al auxilio judicial en aras de revestir de mayor eficacia y eficiencia la acción de la justicia, de ahí que pueda manifestarse que su actuación de encomienda por parte de autoridad judicial será la que determine su actuación, siempre bajo el principio de legalidad inexcusable.

3.3. Ámbito territorial y funciones.

Debido al importante esfuerzo que supone la creación de la ORGA, esta no puede ponerse en marcha de un día para otro, prueba de ello es que la propia Orden Ministerial (Orden JUS/188/2016) que establece la implantación de manera progresiva, y es por lo que se regula un cronograma de puesta en funcionamiento⁵⁰.

En concreto se establece un periodo de comienzo de las operaciones que inicial, desde el momento de la entrada en vigor de la Orden JUS/188/2016 de 18 de febrero de 2016, que discurre desde el 1 de marzo de 2016 en la provincia de

⁴⁹ Art. 127 bis CP: 1. El juez o tribunal ordenará también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias pertenecientes a una persona condenada por alguno de los siguientes delitos cuando resuelva, a partir de indicios objetivos fundados, que los bienes o efectos provienen de una actividad delictiva, y no se acredite su origen lícito. a) Delitos de trata de seres humanos. b) Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores y delitos de abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años. c) Delitos informáticos de los apartados 2 y 3 del artículo 197 y artículo 264.d) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico en los supuestos de continuidad delictiva y reincidencia. e) Delitos relativos a las insolvencias punibles. f) Delitos contra la propiedad intelectual o industrial. g) Delitos de corrupción en los negocios. h) Delitos de receptación del apartado 2 del artículo 298.i) Delitos de blanqueo de capitales. j) Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social. k) Delitos contra los derechos de los trabajadores de los artículos 311 a 313.l) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. m) Delitos contra la salud pública de los artículos 368 a 373.n) Delitos de falsificación de moneda. o) Delitos de cohecho. p) Delitos de malversación. q) Delitos de terrorismo. r) Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal.

⁵⁰ Ver Anexo II: “Cronograma de implantación”, [en línea], http://www.mjusticia.gob.es/Plan_de_Accion_2016_de_la_Oficina_de_Recuperacion_y_Gestion_de_A. [consulta: 20 de abril de 2017].

Cuenca, pasando en fecha 1 de junio de 2016 por la Comunidad Autónomas de Castilla-La Mancha, en fecha 1 de octubre de 2016 en aquellas comunidades autónomas donde sigan asumidas dichas competencias por el Ministerio de Justicia, finalizando el 1 de enero de 2017 debiendo estar implementada en el resto del territorio nacional. Además, se hace especial mención al comienzo de las operaciones en el marco de la colaboración y cooperación internacional para el 1 de junio de 2016.

La previsión es fruto del mandato dado por la norma, en la que se establece que la entrada en vigor debe determinarse mediante Orden ministerial⁵¹, no obstante al establecimiento del comienzo de las operaciones, cabe la posibilidad de que sus actuaciones puedan producir efectos directos sobre aquellas causas incoadas previamente a la entrada en vigor de la oficina, siempre que su actuación de oficio sea autorizada por el Juez o Tribunal que deberá de valorar las circunstancias y elementos concretos que pretendan ventilarse⁵².

Por tanto, debe establecerse una delimitación clara entre el inicio de la andadura de la ORGA y el alcance temporal de los efectos que pueda producir su actuación sobre aquellas causas que se encuentren incoadas.

Si la Oficina actúa de oficio, no existe delimitación temporal, ya que su actuación se entiende de la interpretación literal “...*asumir la gestión y realización de bienes embargados y decomisados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto cuando así resulte conveniente en atención a la naturaleza o especiales circunstancias de los bienes.*”, que puede afectar a cualquier bien decomisado, siendo sus efectos retroactivos, facilitando la extensión a una gran

⁵¹ Disposición Transitoria Primera del RD 948/2015 que regula la ORGA establece que la entrada en funcionamiento se determina mediante Orden del Ministerio de Justicia y se realiza tras la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, y de manera progresiva, de acuerdo con el plan de acción que previamente apruebe el Director General de la Oficina. Aprobando posteriormente la Orden de JUS/188/2016 que determina el ámbito de actuación y la entrada en funcionamiento, así como la apertura de la cuenta de depósitos y consignaciones bancario.

⁵² Disposición Transitoria Segunda del RD 948/2015 que regula la ORGA establece la posibilidad de actuar sobre aquellos procedimientos que se encuentren iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la normativa y por tanto comienzo de las operaciones de la propia oficina.

cantidad de bienes embargados e intervenidos por los órganos jurisdiccionales, como puedan ser los vehículos⁵³.

En cambio, si la actuación de la ORGA es a requerimiento de Jueces o Tribunales y Fiscales en asuntos de delincuencia organizada o actividades delictivas que permiten el decomiso ampliado, su actuación se limita exclusivamente a bienes embargados o decomisados con posterioridad a la entrada en vigor de la norma, tal y como se desprende del cronograma establecido.

Establecido el ámbito de actuación y a la vista de la posible intervención en ilícitos penales, en los que la Oficina pueda encontrarse la participación de organizaciones criminales, se hace necesario delimitar que entiende la jurisprudencia sobre la organización criminal⁵⁴ o grupo criminal⁵⁵.

En el Preámbulo de la última reforma operada del actual Código Penal se justifica la reforma afirmando que el fenómeno de la criminalidad organizada atenta directamente contra la base misma de la democracia, puesto que dichas organizaciones, aparte de multiplicar cuantitativamente la potencialidad lesiva de las distintas conductas delictivas llevadas a cabo en su seno o través de ellas, se caracterizan en el aspecto cualitativo por generar procedimientos e instrumentos complejos específicamente dirigidos a asegurar la impunidad de sus actividades y de sus miembros, y a la ocultación de sus recursos y de los rendimientos de aquéllas, en lo posible dentro de una falsa apariencia de conformidad con la ley, alterando a tal fin el normal funcionamiento de los mercados y de las instituciones, corrompiendo la naturaleza de los negocios jurídicos, e incluso afectando a la gestión y a la capacidad de acción de los órganos del Estado. La seguridad jurídica, la vigencia efectiva del principio de

⁵³TARAZONA LAFARGA, Isabel., «La oficina de recuperación y gestión de activos: Aspectos organizativos», [en línea], https://www.fiscal.es/fiscal/descarga/Ponencia_Tarazona_Lafarga., [consulta: 20 de abril de 2017], p.15.

⁵⁴Art. 570 bis Código Penal "...se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos...".

⁵⁵Art. 570 ter Código Penal "...se entiende por grupo criminal la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos...".

legalidad, los derechos y libertades de los ciudadanos, en fin, la calidad de la democracia, constituyen objetivos directos de la acción destructiva de estas organizaciones.

Por tanto, es sabido que la criminalidad organizada constituye uno de los principales problemas que los Estados deben afrontar, hasta el punto, que tal fenómeno ha pasado a considerarse un riesgo que amenaza la Seguridad Nacional⁵⁶.

Desde un punto de vista criminológico, se pone de manifiesto la complejidad de la figura delictiva, en la que, bajo su denominación, pueden encontrarse múltiples formas de organización criminal, que no tiene por qué responder necesariamente a las organizaciones criminales clásicas, ya que las hay de gran tamaño y también más pequeñas. Además, cabe la posible vinculación internacional o no; el uso de la violencia y la existencia de una estructura piramidal o circular, cuyo fin principal es el acaparamiento de dinero, del que se servirán como instrumento para poder influir en las estructuras del estado.

Por lo que, no se puede otorgar un perfil predefinido sobre la estructura interna de la organización, si bien existen un mínimo de signos característicos que operan como indicadores y que permiten alertar sobre la magnitud o riesgo que pueden presentar los distintos grupos criminales:

- Existencia de un grupo de personas más o menos relevante⁵⁷.
- Reparto piramidal de tareas internas entre los miembros del grupo.
- Estabilidad temporal limitada o permanente.

⁵⁶ FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Antonio., «Organizaciones y grupos criminales (art. 570 bis, 570 ter, 572 y 574)», en José L. González Cussac (director), Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015, 2ª Ed, Tirant lo Blanch, Valencia, p.1290-1391.

⁵⁷ STS nº 576/2014 de 18 de Julio de 2014, La organización y el grupo criminal tienen en común la unión o agrupación de más de dos personas y la finalidad de cometer delitos concertadamente. Pero mientras que la organización criminal requiere, además, la estabilidad o constitución por tiempo indefinido, y que se repartan las tareas o funciones de manera concertada y coordinada, el grupo criminal puede apreciarse cuando no concurra ninguno de estos dos requisitos, o cuando concurra uno solo. Se estima la casación.

- Comisión de actos delictivos graves
- Actuación internacional o movilidad territorial dentro del estado
- Uso de la violencia o intimidación grave de modo sistemático.
- Utilización de instrumentos legales para la constitución de estructuras económicas o comerciales.
- Efectuar tareas de blanqueo de capitales⁵⁸.
- Influencia sobre cargos políticos o personas influyentes dentro de la esfera pública, como medios de comunicación, funcionarios de la Administración Pública.
- Obtención de ventajas económicas y capacidad de influencia en las estructuras del Estado.

Del catálogo de indicadores, debe tenerse presente que no son presupuestos acumulativos, el TS con ello pretende ofrecer la posibilidad de detectar mediante el establecimiento de indicios, tanto aquellas organizaciones de gran tamaño, que extienden sus tentáculos a diversos ámbitos, como aquellas cuyo tamaño es inferior, poniendo de manifiesto la diversidad en los patrones de actuación⁵⁹.

3.4. La cooperación nacional e internacional.

La principal preocupación en la lucha contra la delincuencia transfronteriza es que los bienes derivados de la comisión de un hecho delictivo suelen ser trasladados a otros países, al objeto de ser blanqueados, pretendiendo la distracción de la acción de la justicia, siendo habitual su traslado a territorios cuya fiscalidad es menor.

En el marco internacional existen multitud de convenciones internacionales sobre la recuperación de activos, como la CNU contra el Tráfico Ilícito de

⁵⁸STS de 12 de enero de 2017 (TOL5.937.335) en la que se da el elemento del blanqueo de capitales en un delito de tráfico de droga, en el que debe probarse el origen del dinero obtenido.

⁵⁹STS de 13 de octubre de 2015 (TOL5.542.908) en la que se confirma la condena a los miembros de los Tigres de Arkan, ratificando la condena impuesta por la Audiencia Nacional por integración en organización criminal.

Estupefacientes y sustancias Psicotrópicas de 1988; la CNU contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 y la CNU contra la Corrupción de 2003, en la que se exhorta a los países para que penalicen aquellas conductas sobre las que existe un consenso de la comunidad internacional, es decir, conductas que impidan que los delincuentes obtengan beneficios de su actividad criminal⁶⁰.

En el marco comunitario, se dispone de una Plataforma informal de Organismos de Recuperación de Activos denominada, Plataforma ARO, que se reúne periódicamente y recoge información sobre la aplicación de la normativa de la unión europea, así como sobre el avance de los Estados miembros en la designación de los ARO. La plataforma se ha reunido periódicamente desde el comienzo de 2009 e incluye los ARO designados en los Estados miembros y las autoridades participantes en el establecimiento de los ARO.

Una adecuada puesta en marcha de la recuperación de activos precisa que los encargados de aplicarla, dispongan de herramientas que faciliten la identificación y conexión de bienes obtenidos de manera ilícita, con la actividad criminal. Siendo este el fundamento a través del cual se motiva a que los distintos países creen las Oficinas para mejorar la eficacia de la privación a los delincuentes de sus ganancias, evitando que su actividad sea lucrativa.

Teniendo presente que el antecedente de la ORGA, era la ORA, que nunca llegaron a implementarse en el panorama judicial nacional, en sentido estricto, se decidió por parte del Ministerio de Justicia que fuese el CITCO, quien se configurase como ORA nacional, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Antidroga.

Constituyéndose como punto de conexión con oficinas de terceros estados, de todas aquellas solicitudes que le fueran remitidas por sus homólogos⁶¹, con el

⁶⁰ JAÉN VALLEJO, Manuel y PERRINO PÉREZ, Ángel Luis, «Recuperación de activos frente a la corrupción», Daykinson, Madrid, 2015, p146.

⁶¹ Las oficinas homologas europeas, son fundamentalmente la Oficina de Recuperación de Activos del Reino Unido (NCA), la holandesa (BOOM); belga (OCSC); francesa (AGRASC), cuya cooperación con el CITCO es más relevante, si se compara con respecto a la alemana, polaca, lituana, irlandesa. Como se desprende del informe de 2014 del CITCO.

objetivo de dar celeridad a su actividad de lucha contra el crimen organizado. Si bien la realidad pone de manifiesto, que en esencia han sido las unidades operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quienes han materializado las peticiones internacionales remitidas a España. Siendo la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional; y la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil (UTPJ) las que llevan a cabo el trabajo operativo y de las que muy probablemente se nutrirá la actual ORGA para la disciplina policial que debe desempeñar.

Teniendo en cuenta que la Oficina actualmente inicia su andadura, solo cabe en este trabajo poner de relieve el procedimiento llevado a cabo cuando el CITCO recibe una solicitud de recuperación de activos internacional. Se consulta en la base de datos policial (SRI⁶²), si se está llevando una investigación por parte de alguna institución policial. De ser así, la solicitud se envía a la Oficina de Localización de Activos correspondiente para su tramitación. Si no hay investigación, pero se da algún tipo de indicación geográfica de dónde pudieran encontrarse los bienes a recuperar, se envía al cuerpo policial competente⁶³. Si no se da ninguno de los presupuestos, es una aplicación informática la que distribuye de forma automática las solicitudes recibidas, asignando a GC y CNP, de manera alternativa.

Es importante atender todos los requerimientos internacionales de lucha contra el crimen organizado, la delincuencia siempre anda un paso por delante de la actividad judicial y policial, siendo una obligación la cooperación para coordinar todos los recursos. La cooperación en el territorio nacional, se instrumenta a

⁶²Orden INT/1202/2011, de 4 de mayo, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal del Ministerio del Interior, establece en el Anexo I, que el Sistema de Registro de Investigaciones se encuentra integrado en el Fichero de Coordinación de Operaciones, para la gestión, seguimiento y control de operaciones de crimen organizado, coordinadas o en fase de coordinación, entre las distintas FCSE y otros Servicio o Instituciones, en función de sus competencias en investigaciones sobre tráfico de drogas, así como la coordinación con otros Centros internacionales con competencias similares.

⁶³De manera habitual el territorio nacional se divide policialmente atendiendo a las competencias de cada cuerpo policial, siendo en términos generales competencia del Cuerpo Nacional de Policía en los núcleos de población mayoritarios y Guardia Civil en territorios rurales o de menor población.

través de la suscripción de convenios, en donde se establecen las pautas y compromisos adquiridos.

La ORGA hasta fecha 2017⁶⁴ ha suscrito varios convenios de colaboración con diferentes instituciones, como la Fiscalía General del Estado; Consejo General del Poder Judicial; la Dirección General de la Marina Mercante; el Ministerio del Interior; la Dirección de Bellas Artes y Bienes Culturales; el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; el Consejo General del Notariado; con la DGPNSD; Agencia Tributaria y de Vigilancia Aduanera⁶⁵; la DGT; el Banco de España y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Con ello se pretende delimitar un importante marco de colaboración, sobre la base de suscripción de convenios de colaboración con el que exista una interconexión de recursos y conocimientos, obteniendo un avance sustancial que supone dar velocidad y seguridad jurídica en la actuación de la Oficina.

En concreto, el 19 de mayo de 2016, cuando se suscribe el convenio de colaboración entre la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia en materia de colaboración y apoyo al funcionamiento de la ORGA, cuyo objetivo es establecer un marco de colaboración entre el Ministerio de Justicia y Fiscalía General del Estado, para que se difunda la entrada en funcionamiento operativo de la ORGA; se de impulso a la gestión de la Oficina y se colabore con el Ministerio Fiscal en las diligencias de investigación, en el procedimiento de decomiso autónomo y en la ejecución de comisiones rogatorias a través de la localización de bienes del investigado o de la persona a quien se pretenda decomisar los bienes mediante orden de la autoridad judicial.

Más adelante, el 20 de junio de 2016 se firmó un convenio interministerial entre el Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior, en el que se refuerza la actuación conjunta en el intercambio de información judicial y policía internacional para la

⁶⁴ Ver Anexo III: Convenios Firmados con la ORGA, [en línea], http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/Convenios_suscritos.pdf, [consulta: 20 de abril de 2017].

⁶⁵ Artículo 95 m) de Ley General Tributaria “La colaboración con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos mediante la cesión de los datos, informes o antecedentes necesarios para la localización de los bienes embargados o decomisados en un proceso penal, previa acreditación de esta circunstancia”.

localización y recuperación de bienes objeto de ser decomisados, además de coordinar las actuaciones en el ámbito nacional y apoyar a la ORGA con efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

También el 29 de julio de 2016 se suscribió el protocolo de colaboración entre el Ministerio de Justicia y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en materia de gestión de bienes embargados por el tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados por la ORGA. En esencia se pretende fijar el marco de colaboración, una vez se dictada sentencia judicial firme de decomiso, poder integrar en el Fondo de Bienes Decomisado por el tráfico ilícito de drogas, del mismo modo que se establecen fórmulas de cooperación en funciones de asesoramiento, gestión y realización de efectos atribuidos a ambos órganos.

Otro de los convenios ha sido firmado el 30 de diciembre de 2016 con la Dirección General de Tráfico (DGT), en materia de colaboración y apoyo al funcionamiento, cuyo objeto principal radica en definir las líneas de colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior del que dependen la ORGA y la DGT, respectivamente, para que sea mejor y más eficaz en la localización, recuperación, conservación, administración y realización de los bienes intervenidos, en relación con vehículos que pudieran haber sido intervenidos, embargados, decomisados o susceptibles de serlo.

El 10 de marzo de 2017, se ha suscrito convenio con el Banco de España, al ser el banco central nacional que en el marco del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), efectúa las labores de supervisión del sistema bancario español junto al BCE. Básicamente se dispone de una herramienta que permite atajar el posible banqueo de capitales con la colaboración de cualquier entidad financiera que se utilizase como medio, amparándose en secreto bancario, lo que supondría una traba en la actividad de la ORGA.

El último convenio del que se tiene constancia, se ha firmado el 11 de abril de 2017 con la el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME), que permite conocer la situación registral de los mismos a efectos de evitar actuaciones gravosas para las arcas públicas y

proponer al órgano judicial las medidas que resulten más adecuadas para una óptima gestión de los bienes con las máximas garantías para los nuevos adjudicatarios.

Recordar que, la intervención del dinero es la forma de estrangulamiento financiero más eficaz en la lucha contra el crimen organizado, la memoria semestral de 2016 que la Oficina ha publicado en el Portal de Transparencia del Gobierno recoge que se han tramitado 232 expedientes, que se iniciaron a instancia de la propia oficina en el marco de la actuación de choque que está realizando en la ciudad de Melilla, y los cuatro restantes responden a solicitudes procedentes de juzgados y tribunales.

Entre los bienes gestionados a 31 de diciembre de 2016, destacan 8 millones de euros en barcos; 4,2 millones de euros en cuadros y otros objetos de arte, y otros 8 millones en ropa decomisada. La actuación de choque que se ha puesto el foco sobre la ciudad de Melilla, tiene como finalidad solicitar a los órganos judiciales la destrucción de vehículos que carecen de valor de mercado y, sin embargo, su depósito genera gastos elevados para la Administración⁶⁶.

II. ACTUACION COLABORATIVA DE LA ORGA CON OTROS ENTES.

1. Especial referencia a la encomienda de gestión.

Antes de entrar en el asunto, es relevante hacer mención al posible uso de la figura jurídica proveniente del derecho administrativo, denominada encomienda de gestión.

La misma supone que, en el ejercicio de sus competencias, un órgano administrativo puede encargar (encomendar) a otros órganos o entidades que realice determinadas actividades de carácter material, técnico o de servicios sin que ello suponga la cesión de la competencia ni de su ejercicio⁶⁷.

⁶⁶ Memoria del primer semestre de 2016 de la ORA, [en línea], http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/Memoria_primer_semestre_2'16.pdf, [consulta: 20 de abril de 2017].

⁶⁷ Art. 11.1 y 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Se trata de una técnica de cooperación interadministrativa o interorgánica, de carácter voluntario, que consiste en un “encargo” para realizar actividades de la competencia de los órganos administrativos o de las entidades de derecho público, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño (STSJ Navarra de 20 de mayo de 2003).

2. La cooperación de la ORGA con el PNSD y otras instituciones.

Antes de la última reforma penal, tenía asignado el PNSD actuar en el lugar que ahora ocupa la ORGA, lo que no significa que ahora pierda las competencias en detrimento de la Oficina.

Pese a que el modelo ideal hubiera recomendado que se unificasen ambos Institutos, la solución adoptada por el legislador es acertada, ya que se mantienen intactas las competencias del PNSD y se opta por la posibilidad de que se suscripción de convenios de colaboración, cosa que ya se ha materializado, tal y como hemos indicado en dicho trabajo⁶⁸.

Por ello los bienes y efectos objeto de decomiso a través de sentencia firme que devengan del tráfico de drogas, se integra en el Fondo del Plan Nacional sobre Drogas y la Oficina, solo asumirá sus funciones propias de localización, gestión y enajenación de bienes.

En este punto es relevante el tener en cuenta que antes del decomiso definitivo en sentencia firme, el PNSD carece de competencias de gestión de los bienes decomisados, siendo esta competencia asumida por la ORGA en auxilio de los órganos judiciales.

⁶⁸ Disposición Adicional Primera del RD 948/2015 que regula la ORGA, establece su relación con el PNSD. Quedan excluidos del ámbito objetivo de aplicación de esta norma, los bienes y los frutos o intereses que éstos produzcan, que hayan sido previamente decomisados por sentencia judicial firme y que deban integrarse en el fondo regulado por la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, los cuales quedarán sometidos al régimen específico establecido en dicha ley y en su normativa de desarrollo. No obstante, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá firmar un convenio de colaboración con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas a fin de articular las relaciones entre ambos, que podrá incluir fórmulas de cooperación en las funciones de asesoramiento, gestión y realización de efectos procedentes de actividades delictivas a los que se refiere el apartado anterior; asimismo, podrá hacer referencia al intercambio de información y a la coordinación de acciones, cuando resulte apropiado.

La realidad judicial, pone de manifiesto que la ORGA puede auxiliar en la localización y gestión de bienes decomisados en procedimientos de tráfico de drogas, pese a que en principio se hubiera excluido de su ámbito de actuación. Siendo una evidencia que el PNSD, no pierde competencias, sino que se ve beneficiado por la colaboración de la Oficina sin que suponga la mejora de recursos un aumento del gasto público y si una verdadera cooperación.

De la memoria del primer semestre de funcionamiento de la ORGA⁶⁹, se desprende que existe especial incidencia sobre el territorio de Melilla. Lo que pone de manifiesto la inmediata colaboración entre los dos institutos y la singularidad de la zona geográfica que ocupa dicho territorio. Con el plan de choque llevado a cabo se pretende obtener un ahorro considerable en el mantenimiento y gestión del depósito de vehículos intervenidos, embargados o decomisados, cuyo valor de tasación es 0. Su gestión se realiza mediante la solicitud de una propuesta de actuación dirigida a través de LexNET a los juzgados que conocen del bien, para gestionar su correcta destrucción en Centro Autorizados de Tratamiento de residuos.

También, la Memoria Anual de la Fiscalía de 2016⁷⁰ establece la evolución positiva⁷¹ sobre la destrucción de las sustancias decomisadas llevada a cabo por la comisión de seguimiento de destrucción de drogas, creada el 3 de octubre de 2012 mediante el Acuerdo Marco de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ministerio del Interior y la «Agencia española de medicamentos y productos sanitarios».

⁶⁹ Memoria del primer semestre de 2016 de la ORA, [en línea], http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/Memoria_primer_semestre_2'16.pdf, [consulta: 30 de abril de 2017].

⁷⁰ Memoria anual de la Fiscalía elevada al Gobierno [en línea], https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/MEMFIS16.pdf, [consulta: 30 de abril de 2017].

⁷¹ Evolución positiva por efectuar una importante labor de destrucción de la sustancia psicotrópica, que evita que se tenga que almacenar, dejando únicamente aquella prueba que sirva al procedimiento judicial. Además, se evitan tantos costes de almacenaje y custodia que deben establecerse, evitando la posible sustracción de la sustancia.

3. La adjudicación de los bienes decomisados.

La distribución efectiva de los recursos económicos y materiales, obtenidos como consecuencia de la actividad de la Oficina, es competencia atribuida a la “Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito”⁷², que debe de funcionar conforme a las normas que rigen en el régimen jurídico del sector público.

La función de la comisión, guarda similitudes en su modelo con respecto a la “Mesa de coordinación de adjudicaciones”, establecida para el Fondo de bienes decomisados del PNSD, cuyo principal cometido es adoptar la decisión y destino de los recursos obtenidos; así como velar por el apoyo a programas de atención a víctimas⁷³ y de lucha contra el crimen organizado.

⁷²RD 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la ORGA. Artículo 8. *Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito*.

1. Se crea la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito como órgano colegiado adscrito orgánicamente al Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de Estado de Justicia, al que corresponden las funciones de distribución de los recursos económicos obtenidos por la Oficina, en los términos del artículo 15.

2. La Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito estará presidida por el Secretario de Estado de Justicia, ostentando la Vicepresidencia el Director General de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, y estará integrada por seis vocales, que serán designados respectivamente por el Ministro de Justicia, el Ministro del Interior, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al menos con rango de subdirector general o asimilado, y por el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, con base en el convenio de colaboración celebrado al efecto.

Actuará como secretario, con voz, pero sin voto, un funcionario de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

En la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito intervendrá, con voz, pero sin voto, un representante de la Abogacía del Estado del Ministerio de Justicia.

3. El funcionamiento de esta comisión se ajustará a lo dispuesto en materia de órganos colegiados por la legislación en materia de régimen jurídico del Sector Público.

⁷³ RD 948/2015, de 23 de octubre, que regula la ORGA. Art. 2. Fines. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos aplicará el producto de la gestión y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias del delito a los fines previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con los siguientes objetivos prioritarios:

a) El apoyo a programas de atención a víctimas del delito, tanto de las Administraciones Públicas, como de organizaciones no gubernamentales o entidades privadas sin ánimo de lucro, con especial atención a las víctimas de terrorismo, a las de violencia de género, trata de seres humanos, delitos violentos y contra la libertad sexual, así como a las víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección y a las víctimas menores de edad.

b) El impulso y dotación de medios de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.

La Comisión de Adjudicación es un órgano colegiado que integra miembros de la Presidencia de Ministerio de Justicia; Ministerio del Interior; Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y del Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del Estado⁷⁴.

A lo largo de este trabajo se ha establecido como principales funciones de la ORGA, la recuperación y gestión de los activos decomisados en el marco de un procedimiento judicial, siendo posible que la ORGA haga uso de manera provisional de aquellos bienes intervenidos para el desempeño de sus funciones, siempre y cuando así lo decrete el órgano judicial⁷⁵.

c) El apoyo a programas sociales orientados a la prevención del delito y el tratamiento del delincuente.

d) La intensificación y mejora de las actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos, incluyendo:

1.º Los gastos necesarios para la obtención de pruebas en la investigación, comprendiendo el coste de las pericias del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

2.ª La adquisición de medios materiales para los órganos competentes en la represión, investigación y realización de las pruebas periciales.

3.º La formación y capacitación especializada de los órganos encargados de la prevención y represión de la criminalidad organizada.

4.º El reembolso de los gastos en que lícitamente hayan podido incurrir los particulares o los servicios de las Administraciones Públicas que hubiesen colaborado con los órganos competentes en la investigación.

e) La cooperación internacional en la lucha contra las formas graves de criminalidad.

f) La satisfacción de los propios gastos de funcionamiento y gestión de la oficina, incluyendo los que se hubieran causado en el ejercicio de las funciones contempladas en el artículo siguiente.

⁷⁴TARAZONA LAFARGA, Isabel., «La oficina de recuperación y gestión de activos...».p.16.

⁷⁵ Art. 367 sexies de LECrim.

1. Podrá autorizarse la utilización provisional de los bienes o efectos decomisados cautelarmente en los siguientes casos:

a) Cuando concurren las circunstancias expresadas en las letras b) a f) del apartado 1 del artículo 367 quater, y la utilización de los efectos permita a la Administración un aprovechamiento de su valor mayor que con la realización anticipada, o no se considere procedente la realización anticipada de los mismos.

b) Cuando se trate de efectos especialmente idóneos para la prestación de un servicio público.

2. Cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la Oficina de Recuperación y Gestión de activos, y previa audiencia del interesado, autorizará la utilización provisional de los efectos judiciales, salvo que

En concreto la ORGA, en el marco de su gestión, procederá previa autorización del juez o tribunal competente, a la realización anticipada mediante pública subasta o la forma que se habilite. En este escenario, el juez o tribunal competente, resuelve sobre la posible adjudicación y establece las medidas de conservación que deban ser adoptadas, de acuerdo con lo previsto a tal efecto en la LECrim.

Con esta decisión, se sustrae materialmente el procedimiento de adjudicación llevado a cabo por los órganos judiciales, en favor de la ORGA, que será quien conozca de todos y cada uno de los procedimientos de enajenación o adjudicación del activo ilícito intervenido.

La Oficina tiene obligación de llevar inventario de los bienes gestionados y ante la multitud de subastas de las que puede conocer, se establece la posibilidad celebrar contratos o encomienda de gestión para que la realización anticipada o por disposición del órgano judicial, se efectué a través entidades especializadas del sector privado o público como la empresa TRAGSATEC⁷⁶ filial de grupo TRAGSA⁷⁷ y SEGIPSA⁷⁸.

En definitiva, implica un cambio en relación al procedimiento, ya que una vez la autoridad judicial ha adoptado la decisión de la enajenación, respetando todas las garantías procesales del procedimiento, se sustrae la adjudicación (que no

concurra alguna de las circunstancias expresadas en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 367 quater.

3. Corresponderá a la Oficina de Recuperación y Gestión de activos resolver, conforme a lo previsto legal y reglamentariamente, sobre la adjudicación del uso de los efectos decomisados cautelarmente y sobre las medidas de conservación que deban ser adoptadas. La oficina informará al juez o tribunal, y al Fiscal, de lo que hubiera acordado”.

⁷⁶ Tecnologías y Servicios Agrarios S.A; empresa utilizada para la elaboración de Informes sobre explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, de acuicultura y pesca, propuesta de medidas urgentes de actuación y gestión de su implementación; Valoración de bienes rurales y rústicos y de barcos y explotaciones pesqueras

⁷⁷El Grupo Tragsa forma parte del grupo de empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

⁷⁸La Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. (SEGIPSA) es una sociedad estatal mercantil (100% capital público de la Dirección General de Patrimonio del Estado), declarada por ley medio propio instrumental y servicio técnico de la administración general del estado y de los poderes adjudicadores dependientes de ella, pudiendo encomendar directamente todo tipo de trabajos sobre bienes o derechos integrantes de patrimonios públicos o susceptibles de serlo y que una vez encomendados son realizados por SEGIPSA con sujeción al derecho privado.

enajenación) mediante un expediente administrativo en el que las garantías procedimentales se disciplinan a través del derecho administrativo.

4. El uso provisional de los bienes decomisados.

La ORGA, en el marco de la gestión de los bienes procedentes del ilícito, puede proceder previa autorización de órgano judicial competente, a la asignación del uso provisional del bien decomisado. De igual modo que puede efectuar la realización o destrucción anticipada, cuando la propia naturaleza del bien se prevea que implique un elevado coste de mantenimiento.

Por tanto, será la Oficina quien resolverá sobre la adjudicación en el uso del bien objeto de embargo y sobre las medidas de conservación que deben adoptarse, conforme a lo establecido por la LECrim, debiendo poner en conocimiento de la autoridad judicial la medida adoptada⁷⁹.

Con esta decisión, se dispone de un órgano especializado de carácter administrativo en el que se centralizan todos los expedientes sobre la adjudicación en el uso provisional por parte de la autoridad judicial. Implica que cuando el órgano judicial le encomiende la gestión de un bien intervenido o embargado a la ORGA, y una vez que el órgano judicial autorice la utilización provisional del bien a favor de otra institución, será la Oficina quien se encargara de toda la tramitación y resolución de las controversias que puedan surgir.

La decisión es acertada, porque supone sustraer del procedimiento judicial en favor de un procedimiento administrativo, en el que debe de regir la normativa sectorial del derecho administrativo.

⁷⁹RD 948/2015, de 23 de octubre, que regula la ORGA. Art. 11.3. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, en el marco de su gestión, podrá proceder, previa autorización del juez o tribunal competente, a la realización anticipada o utilización provisional de los bienes y efectos intervenidos. En estos casos, previa autorización del juez o tribunal competente, resolverá sobre la adjudicación del uso de los efectos embargados y sobre las medidas de conservación que deban ser adoptadas, de acuerdo con lo previsto a tal efecto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, informando de lo acordado al juez o tribunal y a la fiscalía.

III. CONCLUSIONES

Primero.- Avance en la lucha contra la corrupción.

La Política Criminal contra la delincuencia más grave y el crimen organizado, desde la estructura del Estado, dispone en la actualidad, con la ORGA, de una institución de auxilio judicial que facilita y descarga de tareas burocráticas a los órganos judiciales. Con ello se facilita la acción de la Justicia, que únicamente deberá de preocuparse de llevar a buen puerto el procedimiento judicial, desentendiéndose de los bienes decomisados en lo que afecta a su gestión y mantenimiento.

Segundo.- Transposición del modelo comunitario a España.

Se ha tenido en cuenta las guías de buenas prácticas internacionales de otras oficinas homologas y del análisis de los distintos sistemas en torno a los que giran su actividad, se ha optado por un modelo de órgano de auxilio judicial especializado. En concreto, el referente francés ha sido el adoptado por la ORGA, siendo un órgano administrativo dependiente de la AGE, evitando que se encuentra bajo la dirección de la Fiscalía, como ocurre en Reino Unido, Bélgica y Países Bajos.

Tercero.- Inoperancia de la anterior ORA.

Al carecer de la función de gestión del activo decomisado, la tarea debía ser asumida por el órgano judicial. Ello ocasionaba problemas, como dilaciones en el procedimiento y pérdida de valor de los bienes. La ORA, únicamente tenía encomendada la tarea de localización policial. Actualmente la ORGA aglutina tanto la función de localización del bien, como su posterior gestión, bajo la tutela del órgano judicial que decide sobre la posibilidad de enajenación anticipada o sobre se usó provisional. Ante la hipótesis de que no pueda ser adjudicado o se carezca de adjudicatario, una vez finalizado el proceso de licitación mediante pública subasta, será el órgano judicial quien adopte la decisión final.

Cuarto.- Órgano especializado en la adjudicación.

La decisión es acertada, por disponer de un órgano administrativo especializado en la adjudicación sobre el uso provisional de los bienes procedentes del ilícito, lo que supone centralizar todos los tramites procedimentales la ORGA. Con ello se sustrae del procedimiento judicial, en el que juez debe requerir del auxilio de peritos, en favor de un procedimiento administrativo técnico especializado en la materia.

Quinto.- Órgano especializado.

La localización de activos ilícitos y la lucha contra la corrupción, resulta de una extrema complejidad. Su personal se integra por profesionales altamente cualificados que provienen de distintos ámbitos de la Administración de Justicia, de aduanas, del ámbito tributario y de la Policía Judicial, que tienen experiencia en la función de asesoramiento y auxilio a la Justicia en los procesos penales a los que los embargos y decomisos van asociados. Además, se prevé la posibilidad de que se asignen jueces, fiscales o letrados de la administración de justicia.

Sexto.- Órgano de cooperación.

La oficina mediante la suscripción de convenios de colaboración y encomienda, efectúa una labor colaborativa y de cooperación con otros organismo e instituciones, facilitando y dando acceso a la ORGA sobre aquellas materias que son propias a otras instituciones. Prueba de ello son los números convenios suscritos en apenas un año de funcionamiento de la oficina.

Séptimo.- Cooperación internacional.

La ORGA en el marco del proceso penal, atendiendo al mandato de auxilio judicial efectuara aquellas diligencias de investigación patrimonial internacional en la ejecución de comisiones rogatorias, actuando también en el procedimiento del decomiso autónomo. Contribuyendo al fomento de la cooperación internacional en materia de embargo y decomiso, lo que a su vez redunda en un mayor beneficio para el Estado, al establecerse una regla de reparto al 50% del producto obtenido entre el país requirente y el requerido, en base al principio de reciprocidad.

Octavo.- Coordinación de las FCSE y Autonómicas.

La actuación conjunta de las distintas FCSE y autonómicas con la ORGA, mediante la suscripción de convenios de colaboración con las comunidades autónomas singulares de País Vasco, Navarra y Cataluña, supone un cambio de paradigma en la actuación colaborativa frente al enemigo común en la lucha contra el crimen organizado.

Noveno.- Herramienta de información.

La oficina tiene habilitación expresa para el intercambio de información necesaria al objeto de llevar a buen término sus funciones, sin perjuicio de que las competencias que en el mismo sentido sigan ostentando otro organismo como el CITCO.

Décimo.- Recurso financiero.

La Oficina, además de ser un órgano de auxilio judicial, es un organismo que de su propia actividad puede obtener recursos económicos, mediante la enajenación y adjudicación de los bienes en depósito objeto de decomiso, una vez se han atendido los costes de mantenimiento el remanente recibe la consideración de ingreso de derecho público, revirtiendo en las víctimas y en otros fines sociales.

Undécimo.- Expectativas.

La nueva ORGA se encuentra predestinada al éxito el panorama nacional, como una de las principales herramientas legales de lucha contra el crimen organizado. Del mismo modo que lo han hecho oficinas homologas del panorama internacional, facilitado por el personal altamente cualificado que la integra. Además, el ser un recurso financiero para las arcas del Estado, en caso de remanente del bien enajenado, supondrá un incentivo para el estrangulamiento financiero derivado de la actividad criminal. Garantizando el principio de que “el crimen no resulte provechoso”.

IV. BIBLIOGRAFÍA

- ACÓN ORTEGO, Ignacio, «La oficina de recuperación y gestión de activos: Aspectos procesales», [en línea], https://www.fiscal.es/fiscal/Ponencia_formacion_continua.
- BLANCO CORDERO, Isidoro., «La aplicación del comiso y la necesidad de crear organismos de recuperación de activos», ReAIDP / e-RIAPL, 2007, A-01:1-19. ISSN 1993-2995.
- DÍAZ CABIALE, José Antonio, «El decomiso tras las reformas del código penal y la ley de enjuiciamiento criminal de 2015», Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2016.
- CAMPOS NAVAS, Daniel, «Decomiso, medidas cautelares y recuperación de activos», [en línea] https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia_Campos_Navas.
- FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Antonio, «Organizaciones y grupos criminales (art. 570 bis, 570 ter, 572 y 574)», en José L. González Cussac (director), Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015, 2ª Ed, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.
- JAÉN VALLEJO, Manuel y PERRINO PÉREZ, Ángel Luis, «Recuperación de activos frente a la corrupción», Daykinson, Madrid, 2015.
- JAÉN VALLEJO, Manuel y PERRINO PÉREZ, Ángel Luis, «Recuperación de activos derivados del delito: un objetivo prioritario de la reforma penal», en la Ley, núm.8545, 2015.
- Memoria del primer semestre de 2016 de la ORA, [en línea], http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/Memoria_primer_semestre_2'16.pdf.
- Memoria anual de la Fiscalía elevada al Gobierno [en línea], https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/MEMFIS16.pdf.
- SANZ MULAS, Nieves, *Política Criminal. Actualizada a las Reformas de 2015*, Ratio Legis Librería Jurídica, Salamanca, 2016.
- TARAZONA LAFARGA, Isabel, «La oficina de recuperación y gestión de activos: Aspectos organizativos», [en línea] https://www.fiscal.es/fiscal/descarga/Ponencia_Tarazona_Lafarga.
- VIDALES RODRIGUEZ, Caty, «Consecuencias accesorias: decomiso (art. 127 a 127 octies)», en José L. González Cussac (director), Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015, 2ª Ed, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.
- VILLAREJO FERNÁNDEZ, Francisco Jiménez, «Novedades legislativas en materia de decomiso y recuperación de activos». Revista de Derecho penal, No. 34, 2011.

V. ANEXOS:

1. Anexo I: Estructura orgánica ORGA.



2. Anexo II: Cronograma de implantación de la ORGA.



3. Anexo III: Convenios suscritos con la ORGA.



MINISTERIO
DE JUSTICIA

SECRETARÍA DE ESTADO DE JUSTICIA

OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN
DE ACTIVOS

CONVENIOS FIRMADOS POR LA OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS

ORGANISMO	Fecha del Convenio
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)	15/03/2017
Banco de España	10/03/2017
Dirección General de Tráfico	30/12/2016
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	08/09/2016
Dirección General del Plan Nacional sobre Drogas	29/07/2016
Consejo General del Notariado	27/07/2016
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía	05/07/2016
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales	24/06/2016
Ministerio del Interior	20/06/2016
Dirección General de la Marina Mercante	07/06/2016
Consejo General del Poder Judicial	19/05/2016
Fiscalía General del Estado	19/05/2016

CORREO ELECTRÓNICO: orga@mjusticia.es

C/ SAN BERNARDO, 19
28015 MADRID
TEL: 91.390.48.90/91

VI. SUMMARY: The new Office of Asset Recovery and Management.

Organised crime has among its main objectives to obtain economic benefits to be able to access to power, as a de facto pressure group, by using the money obtained as the hard currency.

One of the more effective means to fight criminal activity from rule of law structures is to appeal to an appropriate criminal policy, not only based on the punitive element as it has been traditionally, in which it is questioned whether the reparative and restorative function of criminal offence, inherent in the asset recovery and always in the background, is obtained or not.

The benefit obtained as a result of criminal activity was very rarely accessible, and when it was intended to, it was done at the end of criminal procedure, making easier the asset stripping to escape justice. So, the figure of confiscation was ineffective because it was not practiced from the beginning of criminal investigation, to what must be added the existing overload of judicial organs.

The figure of confiscation, from criminal discipline, seeks to tackle the principle that "criminal offence cannot turn out to be profitable", avoiding illicit enrichment. While it is true that judges and prosecutors have not systematically used this figure because of the current reality of judicial deposits, which are full of instrumentalities of crime, but not full of the assets coming from criminal activity.

It is a clear fact that, due to immediacy and probative law issues, the standard practice of confiscation has been imposed on instrumentalities of crime and not on its benefits. However, the disproportionate avalanche produced as a result of criminal activity related to the fight against drugs trafficking makes a matter of urgency to review the current criminal policy in Spain.

In order to prevent and repair the damage caused, the new scenario focus on the recovery of the illicit assets, constituting the figure of autonomous confiscation, independent from the sentence imposed on the alleged perpetrator.

In addition, we have to take into account the important legislative amendment, result of the law transposing carried out by the European Directive 2014/42EU, 3 April 2014, on freezing and confiscation of the instrumentalities and proceeds of crime in the European Union, published by the OJEU (Official Journal of the European Union) dated 29 April 2014, Article 10 of which urges Member States to take the necessary steps to create national central offices, « in order to ensure the appropriate administration of the properties previously seized for the purpose of its possible eventual confiscation». This has been included in the sixth final provision of the Law of Criminal Procedure, in which the ORGA is created, and which is responsible for the functions of location, recovery, conservation and administration of the effects coming from criminal activities under the terms of criminal and criminal procedure legislations.

The European Directive 2014/42EU has been implemented in our legal system by the Organic Law 1/2015, which modifies the Criminal Code, and the Law 41/2015, which modifies the Law of Criminal Procedure in order to speed criminal justice and strengthen procedural guarantees.

Under article 367 septies and the Sixth Additional Provision of Law of Criminal Procedure, the legal regime of the Office of Asset Recovery and Management is formed by the Royal Decree 948/2015, 23 October, which regulates the Office of Asset Recovery and Management, and the Order JUS/188/2016, 18 February, which fixes the field of action and the coming into operation of the Office of Asset Recovery and Management and the opening of its deposit and judicial consignations account.

The Office of Asset Recovery and Management will act at the national and international level when the competent judge or court orders it, of its own motion or at the request of the Office itself or the Public Prosecutor in the exercise of its powers within criminal investigations, procedure of autonomous confiscation and whatever action taken under the terms of criminal and procedural laws.

The Office is an administrative body of the General State Administration and an assistant for the Administration of Justice which seeks to play a very concrete function. In the past, just the asset location was undertaken, not having the management function, so that it was ineffective and hardly operating. Currently, the management of the assets coming from the criminal offence has been included, with full support of institutions, but above all, financial and human resources, provided by the rule of law, that facilitate the work of courts in relation with the asset freezing and confiscating under criminal procedure.

It has as an objective to give legal instruments which result effective in the recovery of assets coming from criminal offence and its subsequent management, giving the deserved importance to asset investigation and confiscation in the fight against organised crime. In the same way, it is intended to minimise the cost incurred in the management of frozen and confiscated assets, removing bureaucratic duties from judicial bodies, which so far had assigned.

With this, optimization of public administration is produced; but also a financial resource is obtained as a result of the disposal of illicit assets, as it is considered a public law income and also it can be dedicated to play a social role as the assistance to criminal offence victims. Moreover, the Office of Asset Recovery and Management is defined as an international cooperation body in the execution of letters rogatory of other states which pretend the judicial assistance of Spanish State.

When projecting on the previous Office of Recovery of the Active, the new ORGA observes that the lack of the function of management, involved that it had to assume by part of the judicial organ, whereas currently agglutinates in an only skilled institution all the procedure of recovery and management of the active illicit.

It supposes an advance in the fight against delinquency and organised crime, from the structure of the state, that has in actuality of an institution of judicial help that facilitates and absolves judicial organs from dealing with so many bureaucratic task. With this help the action of justice, only have to focus on to good port the judicial procedure, correctly without having to pay attention to good decommissions and to its management and maintenance.

The Office, in addition to being an organ of judicial help, is an organism which can obtain economic gains from its own activity, by means of the alienation and adjudication of the goods in deposit resulted from the decommission, once have attended the costs of maintenance, the remainder receives the consideration of entry to public right.

The decision is made by an administrative organ which is specialised in the adjudication on the provisional use of the retired goods of the illicit, it supposes to centralise all transact them judicial procedement the ORGA. With this embezzles of the judicial procedure, in which judge has to requires the help of an experts, in favour of an administrative procedure skilled technician in the matter.

The office by means of the subscription of agreements of collaboration and entrusts, works together and in cooperation with other organisms and institutions, facilitating and giving access to the ORGA on those matters that belong to other institutions. Proof of this are the numerous agreements subscribed in hardly a year of operation of the office.

The conjoint performance of the distinct FCSE and autonomic with the ORGA, is due to the subscription of agreements of collaboration with the singular autonomous communities of Basque Country, Navarra and Catalonia, supposes a change of paradigm regarding the cooperative performance against which the common enemy in the fight against organised crime.

The location of active illicit acts and the fight against the corruption, results in an extreme complexity. Its personnel integrated by highly qualified professionals that come from of distinct fields of the Administration of Justice, of customs, of the tributary system different and of the Judicial Police, that have experience in the function of advice and help to the Justice in the penal processes to which the embargoes and decommissions are associated. Besides, it foresees the possibility that they are assigned to judges, prosecutor or lawyer of the administration of justice.

The ORGA in the frame of the penal process, attending to the mandate of judicial help effected those diligences International heritage research in the execution of rogatory commissions, acting also in the procedure of the autonomous decommissions. Contributing to the promotion of the international cooperation in matter of seizure and decommissions, what additionally results in a greater profit for the State, when establishing a rule of distribution of 50% of the product obtained between the country applicant and the required, in base at the beginning of reciprocity.

The office has habilitation expresses for the exchange of necessary information so as to carry to good term his functions, without prejudice to that the competitions that in the same sense follow having another organism like the CITCO.

It has taken into account the guides of international best practices of other offices recognise and of the analysis of the distinct systems around which turn his activity, has opted by a model of organ of judicial help specialised. In concrete, the French referent has been the adopted by the ORGA, being a dependent administrative organ of the AGE, avoiding that it finds under the direction of the prosecutor, as it occurs in United Kingdom.

The new ORGA finds it to the success the national panorama, as one of the main legal tools of fight against the crime organised. Of the same way that have done it offices recognise of the international panorama, facilitated by the highly qualified personnel that it integrates it. Besides, the be a financial resource for

the arks of the State, in case of remainder of the very transfer, will suppose an incentive for the financial bottleneck derived of the criminal activity.